

Crónica del mes

Noviembre-diciembre

El Salvador cierra un año profundamente marcado por los procesos electorales, las negociaciones comerciales del tratado de libre comercio con Estados Unidos y una gama de problemas sociales irresueltos. En esa dirección, los últimos meses del año han sido cruciales para definir, por un lado, el rumbo de la campaña electoral que llevará a los salvadoreños a elegir a su presidente el año próximo; por otro, el fin del 2003 marca la finalización de las negociaciones que han realizado centroamericanos y estadounidenses para concretar un Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones. Los dos asuntos llegaron a una etapa decisiva entre ambos meses: El Salvador firmó el TLC con Estados Unidos —a esperas de la llamada fase política, en la que los ministros de Economía juegan un papel crucial— y el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a la ciudadanía para los comicios de 2004, autorizando a los partidos políticos y a los candidatos su búsqueda por la primera magistratura del país.

Pero en lo que a la dinámica social se refiere, la situación ha sido más difusa y, por ende, difícilmente mensurable para quienes le miden el pulso al país. En el marco de la precampaña electoral, los candidatos hablaron de la necesidad de intensificar esfuerzos en los sectores sociales. Se habló de refuerzos presupuestarios a educación, salud y seguridad pública; pero, más allá del discurso, el 2003 cierra con la deuda de lo social. Tal apreciación es corroborada por relevantes informes que señalan los grandes déficit sociales salvadoreños, pese a los esfuerzos gubernamentales realizados en los últimos años. Sin dejar de reconocer tales esfuerzos —y sus pretendidos logros—, los informes dicen que los desafíos siguen siendo mayores y que el país requiere, entre otras cosas, de un mínimo de consenso para alcanzar el desarrollo. La falta

de entendimiento y la ausencia de diálogo entre la clase política nacional vistas durante la administración de Francisco Flores permiten llegar a la conclusión que el establecimiento de una nueva sociedad luego de los acuerdos de paz no sería algo automático. Al contrario, los casi doce años que nos separan de ese importante hito han mostrado que algunas tendencias autoritarias aún pululan en la sociedad salvadoreña.

En el ámbito político destaca el capítulo electoral, cuyo desenlace llevó a completar la oferta disponible para los comicios presidenciales programados para marzo de 2004. El FMLN ya tenía su fórmula completa: Schafik Handal y Guillermo Mata; por el PCN, Rafael Machuca y Genaro Ramírez corrían por Casa Presidencial; mientras que la coalición de centro postula a Héctor Silva y Ana Cristina Sol. El partido ARENA fue el último en completar su fórmula presidencial y, de acuerdo a los sondeos de opinión pública, es el primero en las intenciones de voto, seguido de cerca por los efemelenistas.

De acuerdo a la prensa, el plan de gobierno de Saca —celosamente conservado hasta el momento— apunta a la “cohesión social por un país humano y productivo”, destaca la no privatización de la salud y promete, entre otras cosas, un agresivo plan educativo. Saca considera su plan de gobierno como el “más consultado de la historia del país”. La prensa pro derechista lee con menos cortesía los planes del FMLN y de los otros partidos opositores.

El FMLN, primera fuerza política luego de las elecciones legislativas de marzo, no logró mantener su espectacular ascenso y sucumbió ante el embate mediático trazado desde los círculos oficiales que pretendía devolverle al partido de go-

bierno el nivel de preferencia mostrado desde que asumió la conducción del Ejecutivo hace ya tres lustros. De hecho —algo que debe reconocerse—, ARENA supo manejar, como pocos institutos políticos en la historia de América Latina, el desgaste propinado tras catorce años al frente del Poder Ejecutivo y las pugnas internas que, contrario a lo sucedido en el FMLN, por ejemplo, hubieran acabado con sus aspiraciones presidenciales. Todo lo contrario. El partido oficial ha cosechado de la labor que más ha sabido hacer: el juego de la imagen y de la demagogia. La última gran jugada de ARENA fue el Plan Mano Dura, que a finales del año le había reposicionado al frente de las preferencias electorales, en detrimento de las aspiraciones de un FMLN que no pudo contrarrestar la eficacia de una campaña montada inteligentemente.

La jugada de ARENA incluyó la realización de la gira nacional de su candidato Antonio Saca, quien escogiera, el día 9 de noviembre, a su compañera de fórmula, la ex directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ana Vilma de Escobar. La prensa se mantuvo a la expectativa de la decisión del candidato oficial y no escatimó elogios para la figura de la ex funcionaria, destacando su preparación académica y su liderazgo dentro del partido que la postula. La prensa tampoco hizo revuelo de las evidentes diferencias internas existentes en el partido de gobierno que llevaron, el día 12, a la renuncia del presidente del COENA, Antonio Salaverría y el director de ideología, Mario Acosta Oertel, hombre rígido en el partido. Sorpresivamente, luego de siete meses a la cabeza del partido oficial, Salaverría y Acosta, las dos principales figuras de la cúpula del partido gobernante, renunciaron a sus cargos. El primero, sutilmente presentado el día de su entronización como proveniente del sector agropecuario, y ex presidente de ABECAFE. El segundo, también laureado como empresario agrícola, quien, además, venía de una larga travesía de ostracismo interno, al parecer, debido a sus desavenencias con el presidente Francisco Flores.

La prensa leyó el asunto como un acto de tradición partidaria. Antonio Saca fue llamado a tomar las riendas del COENA e inmediatamente negó cualquier indicio de división entre sus filas. “Aquí estamos con una estructura partidaria muy unida”, comentaba el candidato presidencial y nuevo presidente del COENA, días después de su nominación. Pero conviene recordar que Salaverría y

Acosta no sólo eran delegados del clan de Calderón Sol, sino que también portaban la inquietud de un sector específico de la economía: el sector agrícola. Independientemente de la eficiencia con que pudieran representar las demandas y expectativas de este sector, por lo menos contribuían a dar la sensación de estar cerca del poder a un grupo descontento con las prioridades económicas del partido. Muchos areneros reconocen que el descuido de los intereses de los agricultores ha sido el talón de Aquiles del ARENA posterior a los acuerdos de paz.

Simultáneamente, ARENA continuó con su coherente campaña propagandística con el objetivo de disminuir la presencia de su más cercano competidor: el FMLN. Saca —respaldado por las grandes empresas mediáticas— echó manos de la más burda tradición anticomunista muy explotada durante el año que culmina.

El FMLN, por su parte, recibió el respaldo de diferentes sectores sociales, entre ellos un grupo importante de médicos y maestros. El día 16, la gremial magisterial ANDES 21 de Junio dio su respaldo al proyecto del partido de izquierda, a quien fue entregado un documento que contiene un modelo alternativo de educación para El Salvador. “El plan de gobierno del FMLN es el que más se aproxima a las aspiraciones de la mayoría de la población”, comentó Arnoldo Vaquerano, secretario general de ANDES durante el acto simbólico de apoyo político. El FMLN continuó su estrategia de visita “casa por casa” a lo largo del territorio nacional, claro está, no con la misma cobertura mediática de la que gozó la gira del candidato de ARENA.

El 18 de noviembre se registró, en la ciudad de Mejicanos, un primer enfrentamiento serio entre los simpatizantes de los dos partidos mayoritarios, dejando como saldo cinco golpeados y algunos vehículos dañados, de acuerdo a la versión de la prensa. “FMLN embosca a Saca”, tituló el matutino *La Prensa Gráfica* para reseñar los hechos, rememorando un discurso utilizado en el conflicto armado salvadoreño. Tres días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacía la convocatoria oficial para los comicios presidenciales de marzo de 2004, exhortando a los partidos políticos a realizar una campaña sin violencia. Las calles de las principales ciudades del país ya lucían abarrotadas de la propaganda electoral. El día 27 se registró un nuevo enfrentamiento entre miembros de las campañas de ambos partidos, en el nororiente de Chalatenango, cuando activistas de ARENA se dispo-

nían a recorrer las calles principales de Las Flores, bastión de la ex guerrilla. Una veintena de personas resultaron heridas en el enfrentamiento. Luego del enfrentamiento, las dirigencias de ambos partidos se responsabilizaron mutuamente. La prensa se inclinó a absolver a los activistas y dirigentes de ARENA.

Sin duda alguna, la ejecución del Plan Mano Dura ha tenido gran trascendencia en la agenda nacional del fin de año, pese a que su efectividad quedó en entredicho. El mes de octubre culminaba con una discusión en torno a la aplicabilidad de la Ley Antimaras del presidente Flores que le llevó a confrontar con el Órgano Judicial. “Es una ley demagógica y nosotros como profesionales debemos evaluar si se aplica o no”, expresaba Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ilustrando la inconformidad de muchos jueces en torno de la referida ley. En ese escenario de ineficacia de la ley, el día 4 de noviembre, la comisión de alto nivel encargada de velar por el cumplimiento de la normativa anuncia su posible modificación, prentendiendo que la ley fuera permanente.

Dos días después, el presidente Flores anuncia la propuesta de reforma al artículo 6 de la Ley Antimaras y la petición para que los diputados autoricen a la Corte Suprema la creación de tribunales especiales en todo el país dedicados únicamente a procesar pandilleros. La idea es ubicar un juez de Paz, de Instrucción y otro de Sentencia en cada cabecera departamental para enjuiciar a los pandilleros capturados por la Policía Nacional Civil. El día 10, el Ejecutivo presenta el pliego de reformas a la Asamblea y aumenta la tensión entre la Corte Suprema de Justicia y el mismo Ejecutivo. El magistrado Ulices del Dios Guzmán manifestó que la independencia judicial permite rechazar cualquier normativa que no sea acorde a la Constitución Política. El 12, los diputados de ARENA y el PCN unieron sus votos para aprobar la enmienda, penalizando hasta con cinco años de prisión la sola pertenencia a las pandillas y dando potestad al presidente de la Corte Suprema para crear los tribunales especiales.

Paralelamente, mientras la prensa de derecha alababa los pretendidos logros del Plan Mano Dura, criticaba el proyecto de tratamiento de desechos sólidos que los alcaldes del FMLN concretaron con la empresa canadiense, Cintec, para conformar la sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES). Los titulares de prensa hablan por

sí mismos: “Silva deberá responder por MIDES” (*La Prensa Gráfica*, 5 de noviembre), “Alcaldes FMLN defienden a MIDES con ataque a ARENA” (*El Diario de Hoy*, 5 de noviembre); “Acta descubre engaño”, “Cuanto más se hurga, más dudas aparecen” (*El Diario de Hoy*, 12 de noviembre) “Lamentamos la manera en que se han comportado algunas instituciones estatales como la Corte de Cuentas y la Fiscalía, que se han prestado a este juego político”, comentaba, a finales del mes, el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortíz, uno de los firmantes del contrato de MIDES, mientras cerraba filas para defender el proyecto.

En el plano social, las irregularidades en el funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las lecciones de las epidemias que abatieron a los salvadoreños fueron dos temas relevantes al cierre del año. A principios de noviembre empezaron a salir a la luz pública algunos datos de la epidemia de neumonía que durante tres meses mantuvo en vilo al sistema nacional de salud. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, la enfermedad se cobró la vida de 371 personas durante el año, la mayoría ancianos y niños. La atención de unas 29 mil personas le costó a la cartera de Salud unos 3.5 millones de dólares. De acuerdo con la prensa, la epidemia mostró también algunas deficiencias en la atención, entre las que destaca el abuso de antibióticos y de la aplicación de radiografías a los pacientes. En ese contexto, el 18 de noviembre, *La Prensa Gráfica* reveló seis anomalías financieras encontradas por la Corte de Cuentas de la República en el funcionamiento del ISSS, entre ellas, la contratación bajo términos dudosos de empresas de servicios médicos. La reseña periodística señala cómo la Corte de Cuentas escondió información pertinente a los diputados del FMLN que solicitaron detalles, para favorecer a la directiva del Seguro Social.

Para culminar, el día 25, la oficina del PNUD auspició la presentación del *Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2003*, documento que manifiesta que la desigualdad social sigue aumentando en el país, aunque reconoce algunos logros. El informe —el cuarto especial para El Salvador desde 1997— apunta a la conveniencia del diálogo, a la inexorable globalización, a la necesidad de contar con fiables diagnósticos nacionales y a reconocer los progresos alcanzados, entre ellos, la reducción de la pobreza y del déficit habitacional y aumento de la cobertura de servicios sociales básicos.

En torno a los diagnósticos, el informe del PNUD reseña que “es frecuente encontrarnos con lecturas parcializadas de la realidad en las que la finalidad es demostrar que el país ha progresado enormemente o, por el contrario, que se encuentra estancado o en franco proceso de deterioro”. Ejemplo de las primeras es la lectura que del país hace la prensa de derecha: “Se ha progresado a pesar de los dos terremotos, de la recesión mundial, del Mitch, de las dos guerras en el Medio Oriente, del resurgimiento del terrorismo a nivel mundial, de la caída de los precios del café, del incremento en los precios del petróleo. Se ha progresado pese a que tenemos que pagar por la reconstrucción de lo destruido por el FMLN durante la década de la locura”, se lee en un editorial de la prensa escrita publicado el día 27 de noviembre. “Los segundos —prosigue el PNUD— concentran su interés en proyectar un país agobiado de problemas, mal conducido, con riesgos de volver al pasado anterior a los acuerdos de paz, pero que podría cambiar casi milagrosamente con una conducción diferente”. El mes de noviembre culminó, pues, con las diferentes reacciones a los resultados hallados por el citado informe.

En lo concerniente a la economía destaca la fase final de la negociación del TLC con Estados Unidos, la celebración del encuentro de los empresarios aglutinados en ANEP y las expectativas gubernamentales por el comportamiento de la economía nacional durante el año que culmina. El último día de octubre destaca la tercera posición del país —sólo debajo de México y Chile— en el índice de competitividad del crecimiento elaborado por el Foro Económico Mundial. El índice toma en cuenta el nivel tecnológico de las naciones, las condiciones macroeconómicas y la calidad de las instituciones públicas. Finlandia ocupa la primera posición en el índice internacional. No obstante, predominaron las notas negativas. La crisis del café abatía a ese sector sin que deparara buenos augurios para el 2004 y empezaron a filtrarse a la prensa algunas inquietudes en torno del futuro del país en el marco del TLC con Estados Unidos. En el primer punto, el director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), Ricardo Espitia, aseveraba a finales de octubre que la crisis que atraviesa el sector, en virtud de los bajos precios en el mercado internacional, seguiría por dos o tres años más.

Con respecto al TLC, que llegaba a su fase final, el matutino *El Diario de Hoy* publica una nota, el

día 14 de noviembre, en la que da a conocer los resultados de un análisis elaborado por analistas del Banco Interamericano de Desarrollo y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes concluyen que la región centroamericana no se encuentra preparada para enfrentar los retos del TLC que negocia con la potencia económica norteamericana. Los trámites burocráticos, bajos índices de competitividad, la inconclusa unión aduanera y la negativa hacia la apertura comercial son los principales obstáculos en la región, de acuerdo a los analistas. Para el asesor económico del BID, Manuel Agosín, la región estaría apostando a sectores a los que avizora poco futuro, como la maquila, dado que en 2005 la Organización Mundial del Comercio (OMC) liberalizará las cuotas de exportaciones en textiles y manufacturas, lo que abrirá las puertas a los productos de China en el mercado estadounidense. No obstante lo anterior, en la misma edición de ese periódico hay otra nota que subtitula “Maquila salvadoreña, ejemplo internacional”, en la que destacan las declaraciones de Ricardo Housmann, economista de la Universidad de Harvard que asesora a FUSADES, elogiando el crecimiento de las exportaciones de maquila de El Salvador.

El día 18, *El Diario de Hoy* cita un periódico hondureño que recoge las declaraciones de la funcionaria de CEPAL, Rebeca Grynspan, para quien el TLC que la región negocia con Estados Unidos no es la panacea para erradicar la pobreza. Para la funcionaria, la pobreza, desigualdad, educación y articulación del aparato productivo son los principales retos de los países de la región. Cada país —concluye Grynspan— deberá concebir un programa de desarrollo para enfrentarse a los retos del TLC. En esa misma línea, se cita al diario guatemalteco *Prensa Libre*, en el que el analista del BID, Martin Chrisney, declara que “de nada servirá que Centroamérica tenga una ventaja competitiva por su ubicación geográfica y cercanía con Estados Unidos si el transporte de mercancías podría demorar y costar lo mismo que si se comerciara con China”, apuntando a la necesidad de modernizar, entre otras cosas, el sistema aduanero regional.

El 19, la Asociación Nacional de la Empresa Privada realiza la cuarta edición del ENADE denominado “Gobernabilidad en democracia: el compromiso de todos”. Los empresarios salvadoreños decidieron no sólo hacer suyo el problema de la gobernabilidad democrática, sino elaborar un

planteamiento en torno a ella y proponerlo al conjunto de actores económicos, políticos y sociales del país. Tal planteamiento está recogido en el documento *Gobernabilidad en democracia*, en el cual se expone el punto de vista empresarial a propósito de lo que es la gobernabilidad democrática, sus amenazas y sus supuestos más importantes.

Los empresarios no sólo reunieron a los presidentes de los tres Órganos del Estado, sino que convocaron a los cuatro candidatos presidenciales en liza para que estos últimos disertaran sobre el papel del empresariado nacional en sus ofertas programáticas. La novedad respecto a las anteriores ediciones la introdujo, pues, el clima electoral que atraviesa el país, y que pone en sintonía el discurso de los empresarios con el proyecto de derecha representado por el candidato presidencial de ARENA, Antonio Saca. En efecto, pese al fingido carácter imparcial de los empresarios, las simpatías hacia el candidato oficial fueron más que evidentes. Saca no dijo nada que desentonara del discurso de los empresarios.

En cambio, Schafik Handal sí incomodó a los presentes, retándolos a pagar más impuestos: "Mi llamado a los grandes empresarios del país es que vale la pena hacer esos sacrificios, que no los volverán pobres, pero sí le darán ventura a la patria y satisfactoria tranquilidad y prestigio a sus familias y a sus descendientes", dijo elocuentemente el candidato efemelenista en su alocución. Al término del evento, el presidente de la ANEP, Federico Colorado, expresó que "es fundamental que nuestro próximo presidente tenga presente la necesidad de promover y ser ejemplo del respeto a la ley, así como fomentar a través del discurso y la acción una actitud de cooperación con el sector productivo". Finalmente, una encuesta realizada durante el encuentro revela que los empresarios tienen poca confianza en las instituciones públicas, entre ellas la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral.

Así pues, el mes de diciembre empezaba con la expectativa generada por los empresarios en plena campaña electoral. El tema del combate a las pandillas, que tanta expectativa había generado desde julio pasado, mostraba signos de debilitamiento en la agenda mediática. De hecho, salvo el encuentro de los titulares del Ejecutivo y del Judicial, realizado el día 16, para discutir la independencia de ambos poderes en torno al combate de las pandillas, y la noticia de que el Plan Mano Dura no

había sido del todo efectivo en vistas de la liberación de la mayoría de los capturados, la guerra a las maras pareció agotarse en los tribunales de justicia.

El 1 de diciembre, se celebra en el país el Día Mundial del SIDA y, durante un par de días, la prensa volcó el interés de la sociedad hacia la pandemia que en El Salvador ha contagiado a cientos de personas. El Ministerio de Salud reporta, hasta junio de 2003, unos 6 mil casos, pese a que datos menos conservadores hablan de unas 12 mil personas infectadas por el VIH. Al día siguiente, *La Prensa Gráfica*, en otro orden, cita a las autoridades mexicanas quienes reportan que de enero a octubre de 2003 fueron deportados 24 mil 696 salvadoreños desde México, siendo El Salvador superado por los inmigrantes de Honduras y Guatemala.

A principios de mes, la elite económica e intelectual vuelve a captar la atención nacional. FUSADES presenta su "Estrategia económica y social, 2004-2009", en la que daba una serie de recomendaciones a sectores vitales de la sociedad. FUSADES recomienda, entre otras, integrar a los salvadoreños en el exterior al padrón electoral; la creación de un gabinete social o una secretaría técnica que coordine los esfuerzos destinados a la reducción de la pobreza; la reforma del sistema de justicia, a fin de separar las funciones administrativas y las jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; la reforma del sistema político y la reactivación del aparato productivo. Sin embargo, no todos recibieron con beneplácito la propuesta. El día 10 de diciembre, el presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, mostró su desacuerdo con la propuesta de FUSADES. García dijo que el informe de la fundación ha sido elaborado sin los aspectos técnicos jurídicos requeridos.

En el plano político, diferentes sondeos de opinión pública seguían otorgándole a ARENA el primer lugar en las intenciones de voto. Algunos apuntaban a que el partido gobernante ganaría la presidencia en primera vuelta. El 3 de diciembre, la encuesta de la Universidad Tecnológica otorgaba a ARENA una diferencia de 14 puntos sobre el FMLN, en la intención de voto. Al día siguiente, los resultados de un sondeo de *La Prensa Gráfica* indicaban que Antonio Saca se alzaba sobre su contrincante más cercano, Schafik Handal, con el doble de aceptación: el 58 por ciento de preferencias frente al 22 por ciento. La encuesta apunta una victoria de ARENA en primera vuelta. De

acuerdo a la versión de la prensa, la propuesta de gobierno del candidato de la izquierda tampoco cayó en gracia a los grandes empresarios del país. El 5, Handal se había reunido con los dirigentes de la ANEP para presentarles su plan de gobierno. “El FMLN le apuesta a un Estado grande para las demandas sociales. Nosotros creemos que debe ser pequeño, pero fuerte y eficiente”, dijo el presidente de la gremial empresarial, Federico Colorado, al término del encuentro.

Finalmente, en el ámbito económico, la discusión en torno a la aprobación del presupuesto de gastos de 2004 ha sido marcada por la falta de consenso entre las fracciones de la Asamblea Legislativa y las acusaciones mutuas. La oposición acusa a la cartera de Hacienda de presentar un anteproyecto demasiado rígido e inflexible, mientras que ésta se muestra férrea en su propuesta. Como cortina de humo, la prensa pro derechista quiso absolver al Ministerio de Hacienda al intentar hacer creer que el entrapamiento se debía a las intenciones de las fracciones opositoras de recortar 30 millones de dólares al presupuesto del FOVIAL para destinarlos a las alcaldías. El Ejecutivo, la ANEP y la misma prensa se opusieron al recorte y las fracciones finalmente se echaron para atrás. Pese a ello, no descartaron la reestructuración del presupuesto. Los legisladores no lograron consensuar sus posiciones en la última sesión del año y éste acabó sin que hubiera Ley de Presupuesto rubricado.

El gobierno terminó el año cifrando sus expectativas económicas en la rúbrica del TLC, el crecimiento del flujo de remesas —que equivalen al 64.7 por ciento del valor total de las exportaciones de bienes, al 37.3 por ciento del valor de las importaciones totales y dan cobertura al 79 por ciento del déficit de la balanza comercial— y el aumento de las exportaciones —que ronda por el 6.3 por ciento anual, de acuerdo a fuentes oficiales. Al respecto, el Banco Central de Reserva indicaba a mediados de diciembre que “el monto de las remesas familiares a final de año excederá los 2 000 millones de dólares y superará las expectativas que se tenían para el presente año”. El Banco Central de Reserva estima que el comportamiento de las remesas se debe al “desempeño de la economía estadounidense en los últimos meses, por la reducción de la tasa de desempleo de esa nación en los pasados cinco meses y por la prórroga de los beneficios del Status de Protección Temporal (TPS)

para los salvadoreños residentes en ese país”. Sólo entre enero y noviembre de 2003, las remesas registraron 1 891.7 millones de dólares.

El discurso oficial —según comunicado de prensa girado por el Banco Central de Reserva el 22 de diciembre— dijo también que el “crecimiento de la economía salvadoreña de este año se estima en 2 por ciento, como resultado del aumento en las exportaciones y remesas familiares, el dinamismo de algunos sectores, las bajas tasas de inflación, el menor déficit fiscal y el financiamiento del sistema bancario a las actividades productivas en mejores condiciones financieras”, según la presidenta del BCR, Luz María de Portillo. La fuente indica que la economía de El Salvador mejorará el año próximo debido a la “recuperación esperada de la economía mundial, las nuevas oportunidades a partir del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el acceso a otros mercados, el aumento de remesas familiares, la inversión en obras de infraestructura, la mejor producción agropecuaria y la baja inflación”. Sin embargo —precisa el BCR—, “el entorno preelectoral y la incertidumbre externa podrían afectar estas perspectivas”.

Obviamente, el discurso oficial no repite el balance de la CEPAL, organismo que sostiene que la economía salvadoreña, cuyo PIB creció solamente 2.0 por ciento, se situó nuevamente en la fase contractiva del ciclo económico. En consecuencia, el producto por habitante se mantuvo virtualmente estancado por cuarto año consecutivo. CEPAL reconoce que la economía se benefició del incremento de la demanda externa —especialmente de maquila— y que las remesas crecieron hasta llegar a constituir el 14 por ciento del PIB nacional. Pese a ello, el organismo señala que en el escaso crecimiento de la economía influyó “la disminución de la inversión pública, determinada a su vez por la virtual terminación del programa extraordinario de inversión destinado a reparar los daños causados por los terremotos de 2001”. La economía salvadoreña —tampoco lo dicen los balances nacionales— fue la menos dinámica de la región: El PIB de Costa Rica creció 5.6 por ciento; Honduras y Panamá, 3.0 por ciento; Guatemala, 2.4 por ciento; y Nicaragua, 2.3 por ciento.

Por otra parte, la última ronda de negociaciones —la novena— del CAFTA suscitó gran expectativa en los círculos oficiales salvadoreños que ven en el libre comercio con estados Unidos la panacea para sacar al país de la pobreza. El día

8, dio inicio la última ronda en Washington, con el temor de los centroamericanos de salir perdedores en el tema agrícola. Un comunicado girado en la capital estadounidense cita a la representante comercial adjunta para las Américas, Regina Vargo, para quien el CAFTA es un componente importante del esfuerzo de la administración Bush en vistas de fomentar un hemisferio próspero, seguro y democrático. Para Vargo, el comercio de Estados Unidos con Centroamérica es importante, con posibilidades de llegar este año a los 25 000 millones de dólares.

La funcionaria dijo que los países de la región han sido "excelentes" socios comerciales de Estados Unidos y agregó que la meta de las negociaciones del CAFTA es fomentar esta importante relación comercial, elaborando un acuerdo que "reduzca los aranceles, abra los mercados y establezca reglamentos modernos" de manejo de las transacciones comerciales. "El comercio libre tiene una función importante que desempeñar para fortalecer el imperio de la ley y la democracia en la región, con su enfoque en la apertura y la transparencia", dijo la representante adjunta. Regina Vargo señaló los puntos más delicados que quedaban pendientes previo a la realización de la ronda final: la resolución de cuestiones agrícolas, en las áreas de servicios, trabajo y medio ambiente.

Con respecto al tema laboral, la funcionaria apuntó a "un esfuerzo continuo de todas las partes que puede producir normas más elevadas en toda la región". El día 16, al finalizar las negociaciones, la delegación costarricense decidió quedar al margen del acuerdo que el resto de Centroamérica firmó con Estados Unidos, para buscar mejores condiciones en enero próximo. "Tenemos diferencias sobre temas que tienen que ver con servicios, con agricultura y textiles, y esos son los más importantes", dijo el ministro de Economía costarricense, Alberto Trejos. El resto de los países rubricaron el acuerdo, dejando en manos de los ministros de cada país el cabildeo político para la ratificación de los tratados en las respectivas asambleas nacionales.

En definitiva, el 2003 hereda temas vitales al año nuevo. Uno de los más importantes es, sin lugar a dudas, la ratificación del CAFTA por parte de la Asamblea Legislativa, para lo cual se avizora un intenso cabildeo gubernamental y la presión de diversos sectores hacia un Ejecutivo que no ha terminado de convencer a la ciudadanía sobre los pretendidos beneficios de ese tratado. De hecho, la poca disponibilidad de información —fuera de las fuentes oficiales— es uno de los más grandes desafíos para la sociedad civil que buscará hacer rendir cuentas a los gobernantes.

En materia política, si bien aparece bastante definido el escenario electoral que regirá hasta marzo próximo, hay algunas cuestiones que quedan pendientes. En primer lugar, el refuerzo institucional del Tribunal Supremo Electoral, entidad que se ha quedado corta en el actual escenario. En segundo lugar, los partidos y sus candidatos deben transitar de la superficialidad que les ha caracterizado al enfrentamiento con los problemas gruesos de la sociedad, haciendo hincapié en la agenda social inconclusa. Finalmente, en 2004 deberá trabajarse por el fortalecimiento del aparato institucional salvadoreño, cosa en la que han insistido, no sin razón, los distintos diagnósticos elaborados en el país durante el 2003.

En cualquier caso, pese a la insistente campaña antimaras del Ejecutivo, la población todavía reciente sus problemas económicos por sobre la inseguridad, de acuerdo al último sondeo de opinión pública de la UCA, presentado a finales del año. No obstante, la población —de acuerdo con los resultados— no relaciona la crítica situación económica con el partido de gobierno —tanto el presidente Flores como su gobierno son bien evaluados—, ni tampoco relaciona su deseo de cambio con el partido más grande de la oposición. ARENA es visto como el partido que puede poner fin al azote de la delincuencia y al desempleo, muy por encima del FMLN. La recuperación de la agenda social deberá ser punto de honor del candidato que resulte ganador en las elecciones programadas para marzo de 2004.